

EL INFORME DE LA COMISION AD-HOC

CONTEXTO

El asesinato del dirigente sindical Rigoberto Borjas, a mediados de julio de 1992, fue seguido por el de los catedráticos universitarios Cayo Eng Lee y Juan Antonio Callizo. El domingo 3 de enero de 1993 fueron encontrados los cadáveres de dos jóvenes asesinados: Guillermo Agurcia Lefebvre y Lourdes Enamorado. El 5 de enero fue muerto a tiros el arquitecto José Roberto Villanueva. El 15 de enero fue encontrado el cadáver de Ramsés Flores Rubí. Dos días después apareció el cadáver del mecánico Lindolfo Avila. A fines de enero se reconoció el del ingeniero Gaspar Francisco Erazo. El 13 del mismo mes estuvo a punto de perder la vida el joven Kevin Regalado, hijo del ex-jefe de las FFAA, general Humberto Regalado Hernández. El último crimen que conmovió la ciudad fue el del empresario Eduardo Piña Van Tuyl.

A raíz de este asesinato se produjo una furiosa persecución contra el periodista Eduardo Coto de la televisión local, quien casualmente pasaba por el lugar y filmó los hechos. El 4 de febrero fue objeto de un atentado la residencia de Yani Rosenthal, gerente de Diario Tiempo. El atentado con bomba fue una represalia por haber dado protección al periodista Coto.

Todos estos sucesos, sumados a las macabras revelaciones hechas por el exagente de la DNI en San Pedro Sula Josué Eli Zúñiga Martínez, produjeron tal estremecimiento en las bases del poder, que estuvo a punto de producirse un nuevo golpe de barricadas a finales de febrero. El intento, después de la salida de tanques y otros signos de nerviosismo, se disolvió en una negociación.

Paralelamente se desarrolló una fuerte presión de la opinión pública a través de los medios de comunicación, exigiendo el fin de la violencia y la impunidad, así como la investigación y el castigo de los responsables.

Bajo esa presión, se produjo la reunión concertadora de la que surgió la Comisión Ad Hoc de Alto Nivel, el 1 de marzo, con la tarea precisa de proponer alternativas a un mes plazo.

La Comisión quedó integrada por representantes del gobierno, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, los cuatro candidatos presidenciales, los partidos políticos, los medios de comunicación y la Iglesia Católica. En total 17 personas, 3 de ellas altos jefes de las Fuerzas Armadas. La presidió el jefe de la Iglesia, monseñor Oscar Andrés Rodríguez.

La Comisión presentó su primer informe (Documento No. 1) el 10 de marzo, en el que recomendó la intervención de la DNI. Fueron juramentados para este fin el político democristiano Alfredo Landaverde, el teniente coronel Eleodoro Zamora Bados y el exministro de Trabajo, abogado Rodolfo Rosales Abella. A principios de abril fueron leídas en Cadena Nacional las recomendaciones finales, mismas que presentamos en forma resumida a continuación.

RESUMEN

La Comisión Ad Hoc de Alto Nivel consciente de la preocupación de la sociedad hondureña acerca de los problemas de la violencia, la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción y fallas del sistema policial, del judicial y penitenciario, así como de la oportunidad, conveniencia y necesidad de reorganizar instituciones fundamentales del país se ha empeñado arduamente y con devoción cívica y patriótica en la tarea y trabajos que le fueron asignados sin escatimar esfuerzos y tiempo con el único propósito de contribuir a la solución de los problemas señalados.

Debido a la concurrencia de diversos factores socio-políticos y culturales, la población hondureña iba perdiendo algún grado de confianza en el sistema policial, no obstante la puesta en marcha de programas tales como la Defensa Pública, la Escuela Judicial y el de Fiscales, cuyo propósito fundamental es cumplir con las funciones de impartir justicia de un modo independiente, imparcial y eficiente, asimismo, de las reformas que se han intentado en el sistema de policía del país.

Ministerio Público y Dirección Nacional de Investigaciones

La sociedad hondureña necesita la creación de un organismo que la proteja de los actos que ponen en peligro la seguridad personal y de los bienes de los hondureños; es una necesidad impostergable la creación de un Ministerio Público como una sola entidad, independiente, eficaz, autónoma, profesional y apolítica, la cual ha sido sentida por la nación como una aspiración profunda por un largo periodo de la historia a fin de que ejerza la acción penal pública como una obligación de carácter irrenunciable y vele por los más altos intereses del país.

El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales en la forma determinada por la Ley.

El Fiscal General de la Nación velará por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Investigará los delitos, descubrirá a los responsables, tendrá la obligación irrenunciable de ejecutar la acción penal pública, iniciará acciones contra los servidores públicos que falten a la Ley, velará por los intereses de la Nación y entre otros, del ecosistema y de las etnias hondureñas.

El Fiscal General de la Nación deberá ser de nacionalidad hondureña por nacimiento, mayor de 35 años, abogado, haber ejercido

efectivamente la profesión o funciones de la magistratura judicial o de la cátedra universitaria durante 10 años cuando menos, alterna o sucesivamente.

Director del Departamento de Investigación Criminal (DIC)

El Director del Departamento de Investigación Criminal será un ciudadano hondureño por nacimiento, con educación superior y deberá llenar los requisitos que establezca la Ley. Será nombrado por el Fiscal General de la Nación de una lista elaborada por una junta nominadora integrada por dos magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, electos por el pleno de la misma, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, el secretario de Estado en los despachos de Defensa y Seguridad Pública.

En base a las causas que la Ley establezca, el director podrá ser removido de su cargo por el Fiscal General de la Nación.

propósitos a mediano y largo plazo

Tener para enero de 1994 organizado el Ministerio Público y electo el Fiscal General de la Nación, así como otorgar una asignación presupuestaria. Una vez organizado el Ministerio Público, las diferentes funciones de la DNI depurada serán transferidas. El Fiscal General procederá al nombramiento del nuevo director del Departamento de Investigación Criminal previa a esta transferencia.

Los entes responsables de que estas medidas inmediatas y mediatas que se proponen sean ejecutadas en sus respectivas competencias serán la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas.

Sistema Policial

medidas específicas inmediatas

Crear de inmediato un Grupo Nacional de Estudio y Asesoría de los cuerpos policiales bajo las siguientes reglas:

1) Estará integrado por un delegado propietario y su respectivo suplente designado por

- a) la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
- b) las Fuerzas Armadas de Honduras
- c) la Asociación de Medios de Comunicación Social
- d) un delegado de la Presidencia de la República.

Los delegados mencionados en las letras a y c, serán profesionales de preferencia con especialidad o experiencia en materia de policía o áreas afines. El representante de las FFAA de Honduras deberá ser preferentemente un oficial superior de policía. Todos los representantes deberán ser hondureños por nacimiento, mayores de 30 años, de comprobada honorabilidad y seriedad.

Los miembros del Grupo Nacional de Estudios y Asesoría, desempeñarán sus tareas a dedicación exclusiva y percibirán la remuneración que les asignen las instituciones u organizaciones que representan.

El Grupo Nacional de Estudio y Asesoría deberá de cumplir las siguientes funciones: Colaborar en el diseño de una evaluación de todo el personal de la Fuerza de Seguridad Pública, así como de equipo y material. Preparar un equipo de capacitación técnica, cívica y moral de corto y mediano plazo para cubrir las necesidades de personal idóneo de las unidades que componen la Fuerza de Seguridad Pública.

Estudiar y recomendar los cambios que sean necesarios en la organización y funcionamiento de la Fuerza de Seguridad Pública incluyendo la coordinación con el Ministerio Público para una mayor eficiencia de los servicios que presta. Proporcionar elementos para delinear el perfil de los oficiales, clases, agentes y auxiliares de la FSI que necesita el país para garantizar el desarrollo democrático pacífico y ordenado de los valores, derechos y deberes de la persona humana y de las organizaciones y sociedad hondureña en general.

Recomendar los mecanismos que aseguren la continuidad de la apoliticidad sectorial de las personas que forman los cuerpos de policía y de éstos como órganos del Estado. Preparar una tabla de clasificación de puestos y salarios y un proyecto de presupuesto de la fuerza policial tomando en cuenta las medidas para su modernización y mejoramiento. Elaborar un plan de previsión social, actual y futuro, para el personal de las diferentes unidades, tomando en cuenta la naturaleza y características propias de los servicios.

Cumplidas las funciones anteriores con la experiencia obtenida en el tiempo que haya estado funcionando recomendará el encuadramiento definitivo de las fuerzas de la policía en el aparato del Estado. Una vez definida la situación de las fuerzas de policía, el Grupo Nacional de Estudios y Asesoría quedará disuelto.

Que el Poder Ejecutivo gestione asistencia técnica de organismos internacionales y de gobiernos amigos para que colaboren con el Grupo Nacional de Estudio y Asesoría, de los recursos que se requieren para la reorganización y mejoramiento de las unidades de policía. Que el Poder Ejecutivo en su caso elabore los proyectos legales que sean necesarios para ejecutar las medidas que se propongan.

medidas mediatas

Deberá instituirse oportunamente un órgano colegiado superior con amplia representación de los sectores de la sociedad que tendrán

a su cargo la formulación de las políticas del organismo policial.

Las medidas inmediatas y mediatas aquí sugeridas serán implementadas por la Presidencia de la República, por la Comandancia en Jefe de las FFAA, por la Comandancia General de la Fuerza de Seguridad Pública y por el Congreso Nacional, cada uno en su ámbito de competencia y en la oportunidad del procedimiento respectivo.

Sistema Judicial

La Comisión Ad Hoc está consciente que el fortalecimiento del Poder Judicial y las medidas específicas inmediatas que propicien la creación de nuevos organismos auxiliares del Poder Judicial y fortalezcan los existentes deben encaminarse, primordialmente, a la justa aplicación de la Ley y a la oportuna actividad administrativa del órgano judicial a fin de que este poder del Estado actúe eficazmente en la protección de los derechos de las personas y de sus bienes contribuyendo a la reducción del potencial de algunas causas que inducen a la violencia y al descontento popular.

Entre esas causas, sin pretender ser exhaustivos, la Comisión identifica las siguientes: la impunidad, la supuesta corrupción de los titulares de los órganos judiciales y sus auxiliares, la desconfianza en el sistema judicial que induce a diversas formas de venganza y a manifestaciones públicas adversas al sistema judicial, el encarcelamiento indiferenciado entre procesado y condenado que alienta al irrespeto al principio constitucional de la presunción de inocencia hasta la emisión de una sentencia condenatoria y la tan criticada dilación en la sustanciación de los juicios penales.

medidas inmediatas

I. Despolitización sectorial del Poder Judicial

Con el propósito de mejorar la imagen del sistema de justicia acusado de estar altamente politizado, que el Poder Ejecutivo proceda a proponer la concertación de los partidos políticos para asegurar la apoliticidad sectorial del Poder Judicial, sus organismos auxiliares y del Ministerio Público, que los partidos políticos legalmente inscritos y reconocidos procedan a concertar un acuerdo a la mayor brevedad posible en torno a fomentar la credibilidad de los entes partícipes del sistema de justicia, comprometiéndose seriamente a respetar su profesionalización, la estabilidad en los puestos, la Carrera Judicial y la Administrativa y que la selección de los magistrados de parte del Congreso Nacional recaiga en las personas más idóneas.

II. Adacentamiento del Poder Judicial

Para aclarar el cargo generalizado sobre supuestos actos de corrupción atribuidos a funcionarios y empleados del Poder Judicial es necesario revisar acciones encaminadas a la investigación sobre el patrimonio de su personal. Como paso inicial se propone integrar un Comité de Probidad Judicial compuesto por el inspector judicial y un auditor nominado por la Dirección General de Probidad Administrativa. El Comité tendrá como función principal investigar las denuncias y los posibles casos de enriquecimiento ilícito del personal del Poder Judicial, deberá informar sobre el resultado de su labor investigativa a la Dirección General de Probidad Administrativa para que se proceda conforme a derecho.

Educación Jurídica Popular

Proporcionar al conglomerado nacional información acerca de los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y conocimientos jurídicos básicos para que los ciudadanos tomen conciencia de sus deberes relativos a cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes de la República.

Se propone que por medio de la Secretaría de Prensa se proporcione un espacio de 60 minutos una vez por semana en Radio Honduras y en las radios que deseen colaborar, para difundir el Programa Educación Jurídica Popular, que habrá de diseñar la Corte Suprema de Justicia. Esta actividad deberá de iniciarse el 1 de mayo de 1993. El ente responsable será la Secretaría de Prensa en coordinación con la Corte Suprema de Justicia.

medidas coadyuvantes

Que en consonancia con las ideas y objetivos fundamentales en que se inspira el Acuerdo Nacional para las Reformas Institucionales que garanticen la seguridad y la paz social en Honduras y con el propósito de contribuir a lograr un clima de mayor tranquilidad y armonía en la sociedad hondureña, la Comisión Ad Hoc de alto nivel formula las siguientes exhortaciones y recomendaciones.

Exhorta a las autoridades civiles y militares para que ejerciten sus atribuciones y cumplan sus deberes con estricto apego a la Constitución y demás leyes de la República.

Igualmente exhorta a las organizaciones, instituciones, asociaciones, sociedades y demás personas jurídicas-privadas, así como a toda la población en general, nacionales y extranjeros, para que dentro del marco de las leyes ejerciten las libertades y derechos que la Constitución reconoce y garantiza con absoluta responsabilidad y respeto a las libertades y derechos de los demás.

Condena cualquier forma de impunidad de personas, grupos, sectores o estamentos de la Nación, sean que pertenezcan a los organismos o instituciones del Estado o a la sociedad civil. (cedoh)

REACCIONES

Fuerzas Armadas de Honduras:

"Las resoluciones de la Comisión no afectan a las Fuerzas Armadas", dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis

Alonso Discua Elvir al opinar sobre el informe de la Comisión Ad Hoc. Agregó que el paso de la DNI a los civiles "es bastante difícil y de bastante costo". Citó que en El Salvador la reorganización de la policía ha costado unos 200 millones de dólares.

Custodio López:

El aún presidente del Comité No Gubernamental de Derechos Humanos de Honduras (CODEH), Ramón Custodio, opinó que "no puedo estar alegre (por el informe) porque la situación no ha cambiado y lo único que hay por el momento son promesas de que mejorará la aplicación de la justicia y de que se depurará la DNI".

COFADEH

La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha de Nativí, elogió la viveza del Presidente de la República al apuntarse un mérito histórico personal, pero lamentó la intocabilidad de las Fuerzas Armadas y la no consideración de la impunidad de los hechos de la última década y el problema inconcluso de las desapariciones forzadas.

CIPRODEH

"Muchas personas confundieron el papel de la Comisión Ad Hoc con una Comisión de la Verdad, estilo El Salvador, y esperaban escuchar una serie de revelaciones acerca de los últimos crímenes y de los responsables de las principales violaciones a los derechos humanos en Honduras. Al Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) ese sabor a omisión le parece claro, porque cómo vamos a crear un ambiente de paz y seguridad social si no hemos roto el círculo oprobioso de la impunidad que tanto daño causa al pueblo hondureño?"

CONAPRODEH

"Esperaba mucho menos de la Comisión. Lo importante es que las Fuerzas Armadas van entendiendo cuál es su nuevo papel, su verdadero rol en una sociedad democrática... Ya han aceptado conceder una primera cuota de poder, y más adelante tendremos facilidades para que este poder se limite a lo estrictamente necesario", opinó el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza.

DIPUTADOS

"El informe es incompleto e inconcluso en varias situaciones y expectativas populares, pues se dieron recomendaciones como la creación de un Ministerio Público, un Fiscal del Estado y que la policía pasara a manos de un órgano civil rectorado por un civil, pero no dijo nada sobre los crímenes que han quedado impunes en el país", indicó el diputado liberal Oscar Armando Avila.

"Hemos analizado el contexto general de ese extenso documento que presentó la Comisión Ad Hoc, y hemos visto que la comisión resolvió el problema del gobierno, pero no el problema del pueblo hondureño, y ni siquiera resuelve el problema de la policía", acotó el legislador nacionalista por Comayagua, Raúl Pineda.

CNTC

"Dejaron prácticamente intacta lo que es la estructura militar, ya que el documento no se refiere en ningún lado a reformas de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Me parece que es un buen paso, lo malo es que las coyunturas que dieron origen a la Comisión es difícil que se vuelvan a presentar para hacer una revisión total de la institución militar", expresó el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Rafael Alegria.

"VISITACION PADILLA"

"Cuando nosotros como organización de mujeres hicimos una consulta al pueblo, las personas que votaron lo hicieron contra la estructura que crea la violencia en este país. La Comisión no planteó el problema principal: la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Trabajó muy bien el sistema judicial, pero no tocó la raíz, que es precisamente la que ha envuelto a nuestra sociedad en una situación de violencia permanente. No hemos ganado nada, el pueblo hondureño está como al principio", aseguró Gladys Lanza, activista del Comité de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla".

DIARIO TIEMPO

"...Podemos decir que la Comisión Ad Hoc de Alto Nivel no parece haber comprendido la magnitud, alcances y oportunidad de su mandato, que, como lo hemos señalado en otras oportunidades, le fue manifestado de viva voz por todos los sectores que integran la nación hondureña, y que el presidente Callejas interpretó perfectamente al emitir el Decreto Ejecutivo 16-93... El consenso general es que la Comisión se quedó muy corta en la decisión fundamental, cual es la de formular la decisión política respecto a la ubicación de la Fuerza de Seguridad Pública, en base al reclamo nacional de que ésta sea separada de las Fuerzas Armadas y puesta bajo control y dirección absolutamente civil", así editorializó diario Tiempo de San Pedro Sula.

LA SIP

El delegado en Honduras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), abogado Edgardo Dumas Rodríguez expresó su desacuerdo en relación al llamado que la Comisión hace a los medios de comunicación para que sustituyan una cultura de la muerte, de la confrontación y el delito por una cultura de la vida, de la paz y la unidad. "Creo que si los medios de comunicación no hubieran hecho alusión a los crímenes, la comisión no habría existido", expresó.